

C.A. de Santiago

Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se sustanció esta causa RIT O - 6886 - 2019, caratulada "MALUENDA CON CODELCO CHILE", sobre despido Injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones.

Por sentencia definitiva de tres de noviembre del año dos mil veinte, la Juez de la causa rechazó la excepción de finiquito opuesta por la demandada, y acogió parcialmente la demanda, sólo en cuanto declara que el despido del que fue objeto el actor fue injustificado, ordenando el pago del recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicios, calculada sin tope legal, diferencias de feriados, gratificaciones y bono de gestión adeudados. Además, dispuso la devolución del descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía efectuado de la indemnización por años de servicios, así como el pago cotizaciones adeudadas, y remuneraciones y prestaciones devengadas hasta la convalidación del despido, sin costas.

Contra este fallo la demandada dedujo recurso de nulidad, invocando, como causal única, la del artículo 477 del Código del Trabajo, pidiendo que se acoja el recurso de nulidad, invalidando la sentencia, y dictando fallo de reemplazo que declare que se acoge la excepción de finiquito interpuesta por ella, la improcedencia de la sanción de nulidad, cuando es la sentencia de grado la que constituye la existencia de la relación laboral, la improcedencia de que el recargo legal del 30% por despido improcedente sea sin tope alguno, la improcedencia de que se adeudan diferencias por concepto de feriado legal, gratificaciones y bonos, y la procedencia del descuento del seguro de cesantía realizado, con costas.

El recurso fue declarado admisible, procediéndose a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de las partes.

Considerando:

Primero: Que la demandada hace valer como única causal la del artículo 477, en relación a los artículos 177, 162, 168 y 172, todos del Código del Trabajo, al artículo 1698 del Código Civil, y a los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, por haberse dictado el fallo con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

LHETKBPVV



La vulneración del artículo 177 del Código del Trabajo, la cimenta en que el fallo, en su considerando quinto, desestimó la excepción de finiquito opuesta a la demanda, esencialmente fundado en que conforme al principio de primacía de la realidad, los múltiples contratos, de diversas naturalezas, que unieron a las partes, darían cuenta de una continuidad laboral que se fraccionó instrumentalmente en varios contratos precarios, por lo que los finiquitos carecerían de poder liberatorio por no dar cuenta de un término efectivo de la relación laboral que unió a las partes ni aún a pesar de haber mediado una renuncia.

Argumenta la recurrente que este razonamiento transgrede lo dispuesto en el artículo 177 del Código del Trabajo, ya que se ha cumplido con todos los requisitos que exige la norma para que tengan validez y poder liberatorio, al haber suscrito el actor diversos finiquitos por escrito, espontáneamente, y ante ministro de fe, reconociendo en éstos que nada le adeudaba Codelco; por lo que, de haberse aplicado correctamente la norma, no se habría establecido una relación laboral indefinida y de larga extensión, desde enero de 1997, sino que desde el julio de 2005, lo que aumentó artificialmente la base de cálculo de la indemnización por años de servicios a que fue condenado.

Segundo: Que previo análisis de este punto es necesario recordar que el artículo 177 del Código del Trabajo, establece los requisitos que debe contener el finiquito para ser eficaz, pero no regula sus consecuencias, de tal manera que no se aprecia la relación existente entre los efectos que la sentenciadora le brindó a tal documento con la norma invocada, siendo ésta la primera razón por la que el recurso debe ser rechazado en este punto.

En segundo lugar, del tenor del arbitrio en análisis, es posible observar que lo que el recurrente recrimina a la magistrada es no haber valorado debidamente el finiquito incorporado por él, cuestión que escapa al contenido de esta causal, pues invocarla implica la aceptación de los hechos asentados en el fallo, advirtiéndose, que tal y como el propio recurrente indica en su libelo, en el motivo quinto de la sentencia, luego de analizar los contratos se establece que éstos “...*dan cuenta de una continuidad laboral (...) los finiquitos firmados carecen de poder liberatorio en este escenario, pues no dan cuenta de un término efectivo de la relación laboral que unió a las partes (...) la sucesiva firma de finiquitos, que nadie discute que han cumplido con las exigencias formales, no logran liberar al empleador de la relación anterior porque en los hechos esa*



relación laboral nunca ha terminado, más bien ha mutado (...) el demandante nunca dejó de prestar servicios de manera subordinada para la demandada...”

De lo transcrito, fluye que la sentenciadora dejó asentado que los finiquitos no pusieron término a la relación laboral porque el trabajador continuó prestando servicios para la demandada en forma ininterrumpida e incluso con mayor cantidad de responsabilidades a medida que pasaba el tiempo, siendo éste un presupuesto fáctico que no puede ser modificado por medio de esta causal, en razón de ello, es que el recurso será rechazado en relación a este acápite.

Tercero: Que una segunda norma que se invoca como vulnerada es el artículo 162 del Código del Trabajo, y en relación a aquella, el recurrente argumenta que, en cuanto a la nulidad del despido, el considerando quinto del fallo tuvo por establecida la existencia de una relación laboral entre los meses de abril a junio de 1998, período en que las partes se vincularon mediante un contrato de prestación de servicios a honorarios, ordenando el pago de las cotizaciones correspondientes a ese período, y las remuneraciones y prestaciones que se devengaran hasta la convalidación del despido.

Sostiene que lo resuelto transgrede lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, ya que no procede la sanción de la nulidad del despido cuando la sentencia es constitutiva de una relación laboral, como ocurre en la especie, en que se determinó que un periodo de tres meses en que las partes se vincularon mediante un contrato a honorarios en realidad correspondía a un vínculo de carácter laboral, ya que no procede la sanción de nulidad del despido cuando no han existido retenciones por parte del empleador, tal como ocurrió en el caso del actor, citando las sentencias de Unificación de Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en causas roles 4556-2010 y 852-2010, en apoyo a su postura. En tal sentido, señala que de haberse aplicado correctamente la norma, no se le habría condenado a la sanción de la nulidad del despido, lo que le provoca un perjuicio patrimonial claro.

Cuarto: Que en el fallo en estudio quedó firme que, entre los meses de abril a junio de 1998 las partes suscribieron un contrato a honorarios, en virtud del cual el empleador no estaba obligado a efectuar descuentos para fines previsionales, deber que recién se le impuso en el fallo recurrido, en consecuencia, no resulta aplicable la sanción dispuesta en el artículo 162 del



Código del Trabajo, el cual tiene por objeto castigar a los empleadores que, habiendo descontado los dineros correspondientes a las obligaciones previsionales, los han mantenido en su poder sin enterarlos en las entidades pertinentes, lo que no aconteció en este caso.

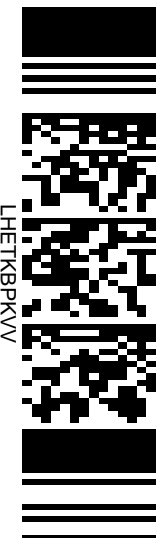
De manera tal, que al haberse aplicado incorrectamente esta disposición en la sentencia impugnada se ha cometido un yerro, puesto que se ha aplicado la sanción del artículo 162 inciso 5, a un caso para el que no se encuentra prevista, por lo que deberá enmendarse anulando el fallo en este punto, en la forma que se explicitará en lo resolutivo de la presente sentencia.

Quinto: Que, una tercera disposición cuya vulneración se representa es el artículo 1698 del Código Civil, y en relación a ella, el incidentista expone que el considerando quinto del fallo le condenó a pagar una diferencia por concepto de feriados, señalando que el actor indicó que se le adeudaban 41 días hábiles, y que el empleador reconoció 37, correspondiendo al demandado explicar la razón por la que descontaba estos cuatro días.

Respecto a las gratificaciones, el mismo considerando razonó que, habiéndose reconocido en la contestación de la demanda la procedencia de esta prestación, pero controvirtiendo su monto, señaló que era carga de la demandada determinar o aproximar la cantidad, por lo que dio lugar a la pretensión por el monto demandado.

Finalmente, respecto al bono de gestión de desempeño, el fallo estableció que era el demandado quien debía aportar prueba suficiente para controvertir que este no existió, o de haber existido, por qué no tendría derecho al mismo el trabajador, y su monto, por lo que da lugar a esta pretensión, en la suma demandada.

Manifiesta la recurrente que el razonamiento citado vulnera lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, que establece que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, indicando que la carga de la prueba de acreditar la existencia, procedencia y monto de los feriados, gratificaciones y bonos demandados era del actor, no existiendo en materia laboral disposiciones especiales que inviertan la carga de la prueba, rigiendo en consecuencia las reglas generales, por lo que la Juez del grado condena al pago de diversas prestaciones, cuya existencia no se probó en el proceso, al solo mérito de los dichos del libelo, lo que le genera un perjuicio patrimonial claro.



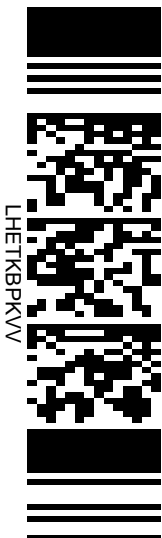
Sexto: Que, para una mejor comprensión del asunto sometido a la decisión de esta Corte, se analizará cada una de las prestaciones cuestionadas. Así, en primer lugar, y en relación al feriado proporcional, no es posible advertir cómo es que se habría vulnerado el mencionado artículo 1698, puesto que la sentenciadora explica en el fallo que ha sido la propia demandada quien, en un documento incorporado por ella, reconoce los 41 días reclamados por el actor, sin que explicara debidamente por qué luego descuenta 4 días. De tal manera, que frente al propio reconocimiento efectuado por el empleador, el actor no tenía nada más que probar.

Luego, en lo tocante a las gratificaciones proporcionales, revisada la contestación de la demandada, se corrobora que efectivamente, en dicho libelo se reconoce el derecho del actor al mencionado beneficio cuestionando únicamente el monto, de tal suerte que, habiéndose reconocido la obligación, la que además, sólo contiene un tope máximo, esto es 7,92 Ingresos Mínimos Mensuales Brutos, correspondía al demandado acreditar cuál era el monto menor que alegaba.

Lo mismo ocurre con el llamado Bono de Gestión de desempeño, puesto que habiéndose reconocido en la contestación que este beneficio se encontraba estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo “Supervisores Rol “A” Casa Matriz” de fecha 04 de octubre de 2017, contrato colectivo vigente y al cual el demandado se encuentra sujeto, cabe concluir que al demandante le asistía este derecho, y en consecuencia la obligación de pago, por lo que era el demandado quien debía acreditar las razones que lo eximían del mismo.

Séptimo: Que, en virtud de lo razonado no se advierte algún yerro en la interpretación de la norma que deba ser subsanado por este medio, por lo que el recurso se rechazará en este capítulo.

Octavo: En un cuarto acápite, se indica como vulnerados los artículo 168 y 172 del Código del Trabajo, argumentando que el considerando quinto del fallo determina que, atendido que las partes pactaron que la indemnización por años de servicios se pagara sin los topes legales de años ni de montos, lo que arrojaba un total de \$90.120.404, el recargo del 30% por la aplicación improcedente de la causal de despido debía calcularse igualmente sobre la indemnización completa, sin tope de montos ni de años, ya que las partes contractualmente así lo pactaron, e incluso si no lo hubieran hecho, el artículo 168 del Código del



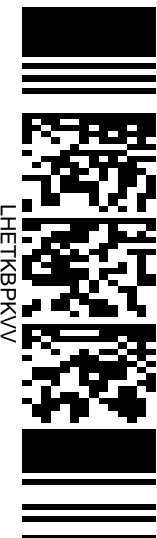
trabajo es genérico al indicar el recargo, al señalar solo un porcentaje de la indemnización por años de servicios que corresponda.

Argumenta la recurrente que se infringe con lo razonado lo dispuesto en los artículos 168 y 172 del Código del Trabajo, primero ya que nada se dijo respecto del recargo legal en el contrato colectivo de Trabajo “Supervisores Rol “A” Casa Matriz” de fecha 4 de octubre de 2017, el que solo establece la no aplicación del límite legal de 11 años a la indemnización por años de servicios, más nada dice de los eventuales recargos legales por una eventual aplicación injustificada o improcedente de una causal de despido, por lo que, a falta de acuerdo, deben aplicarse las reglas generales, incluido el límite legal, especialmente atendido el carácter sancionatorio del artículo 168 del Código del Trabajo, no resultando procedente ampliar la sanción que previó el legislador, y que al haberse resuelto lo contrario, se le ha afectado patrimonialmente, al tener que pagar una suma no ajustada a derecho por concepto de recargo legal por aplicación improcedente de la causal de despido.

Noveno: Que en el artículo 168, letra a), que sería la aplicable en la especie, únicamente se establece el porcentaje de recargo respecto del monto de las indemnizaciones previstas en los artículos 162 inciso cuarto y 163 incisos primero y segundo, todos del Código del Trabajo, para el evento de que se desestime concurrente la causal necesidades de la empresa.

Sin embargo, en dicha norma no se establece algún límite para el mencionado recargo, lo que no es necesario, puesto que los artículos de un determinado cuerpo legal no pueden ser analizados en solitario, sino que dentro de una interpretación sistémica, y así, no encontramos con que el propio artículo 163, ya mencionado, en el inciso segundo, cuando establece la indemnización legal por años de servicio, la cual recordemos es el mínimo a pactar, le fija un límite en el tiempo. Pero cuando se trata de la indemnización convencional, lo deja a la voluntad de las partes, y en dicho caso son ellas las encargadas de regular dicho tope, si es que esa es su voluntad, de tal manera que, si al pactar la indemnización no se le fijó un límite, una interpretación sistémica de la legislación laboral necesariamente lleva a concluir que el recargo no puede estar limitado.

En consecuencia, la interpretación efectuada por la sentenciadora es la correcta.



Décimo: Finalmente el recurrente expone que, el considerando quinto del fallo condenó a Codelco a la devolución del monto del aporte del empleador al seguro de cesantía descontado de la indemnización por años de servicios, al estimar, que declarado injustificado el despido resulta improcedente el descuento, pues el empleador no ha invocado como corresponde la causal que le da derecho al mismo.

Sostiene la recurrente que este razonamiento infringe lo dispuesto en los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, ya que las normas citadas sólo exigen que el término del contrato se verifique por la causal de necesidades de la empresa para que proceda el descuento en controversia, lo que así ocurrió, sin que la disposición efectúe exigencia alguna de que la causal no deba ser declarada improcedente en juicio para que el descuento sea válido.

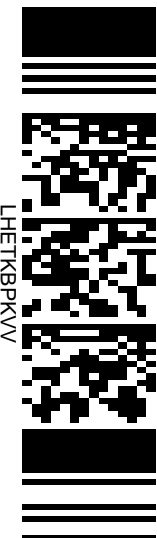
Undécimo: Que el citado artículo 13 de la Ley N° 19.728, establece que: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios...”*, agregando el inciso segundo que *“se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía...”*.

Por su parte, el artículo 52 de la citada ley establece que: *“Cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido o improcedente, en conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, o por despido indirecto, conforme al artículo 171 del mismo Código, podrá disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, en la forma señalada en el artículo 15, a partir del mes siguiente al de la terminación de los servicios.*

Y agrega en el inciso 2° que: *“Si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13.”*

Por su parte el artículo 54 del mismo cuerpo legal establece que: *“Las prestaciones establecidas en esta ley de cargo de los empleadores a favor de los trabajadores afiliados al Seguro, tendrán la calidad jurídica de indemnizaciones por años de servicio, para todos los efectos legales, y gozarán del privilegio establecido en el N° 8° del artículo 2472 del Código Civil”*.

Duodécimo: Que, del tenor de las disposiciones antes transcritas, se desprende que, para que el descuento opere, es necesario que el saldo que se registra en la cuenta individual del



trabajador, por concepto de seguro de cesantía, se haya producido el término de los servicios del trabajador a la causal de necesidades de la empresa.

Por ende, si el trabajador ha recurrido a la justicia para que se pronuncie sobre la validez de esa causal de término de los servicios, en relación con el recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios y de la restitución de esos fondos descontados en el finiquito, los efectos que se derivan de aquella pretensión quedan en suspenso hasta la decisión jurisdiccional.

Ahora bien, si el juez determina que no se han probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador y declara que el despido de este es injustificado -como ocurre en la especie- no puede tener lugar la imputación referida en el inciso segundo del artículo 13 precitado, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa.

Por último, admitir la tesis del recurso significaría que la decisión jurisdiccional en cuanto declara injustificado o improcedente el despido carece de eficacia, lo que es un evidente contrasentido, ya que al no haber operado la causal invocada por el empleador para despedir al trabajador, los efectos que pudiera haber generado ese término de servicios deben retrotraerse a su estado anterior, razón por lo que es del todo procedente restituir el dinero que se ha descontado indebidamente al trabajador.

En suma, por lo ya expuesto, la interpretación que ha dado la sentencia a las normas denunciadas es la correcta, por lo que no se configura la infracción de ley esgrimida por la demandada, lo que conlleva al rechazo del recurso en relación a este capítulo.

Por los motivos anteriores, más lo previsto en los artículos 162, 477, 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de nulidad deducido por la demandada Corporación Nacional del Cobre en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT O-6886-2019, la que se **invalida**, sólo en la parte que declaró la nulidad del despido de don José Naun Maluenda Cuevas, y condenó a la demandada a pagar las remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen desde la fecha del despido ocurrido el 25 de julio de 2019 hasta que se acredite el pago de las cotizaciones correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 1998,



dictándose a continuación, y sin previa vista, la correspondiente sentencia de reemplazo.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra (I) señora Pamela Quiroga Lorca
Laboral-Cobranza N° 2394-2020.-

Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y la Ministra (I) señora Pamela Quiroga Lorca. No firman las Ministra (S) sra Poza y sra Quiroga, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber expirado su suplencia e interinato respectivamente.

En Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



TOMAS GUILLERMO GRAY
GARIAZZO
MINISTRO
Fecha: 26/07/2021 11:56:52



Proveído por el Señor Presidente de la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



C.A. de Santiago

Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Atendido el motivo para acoger el recurso de nulidad y que el vicio constatado se cometió en lo dispositivo de la sentencia, se mantiene la sentencia anulada, salvo el párrafo sexto del considerando quinto, el que se elimina.

Y teniendo, además, presente:

Primero: El considerando cuarto de la sentencia de nulidad.

Segundo: Que en cuanto a la acción de nulidad del despido fundada en la aplicación del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, lo primero a señalar es que tratándose de una norma de carácter sancionatorio debe aplicarse de manera restrictiva.

Lo segundo, es que en el presente caso la relación que hubo entre las partes durante los meses de abril, mayo y junio, a esa fecha, lo era de carácter civil puesto que habían suscrito un contrato a honorarios, y en razón de ello, el demandado no efectuó retenciones para el pago de cotizaciones previsionales ni de salud, obligación que recién se le impuso en la sentencia recurrida.

Tercero: Que, en consecuencia, no nos encontramos frente a un empleador que retuvo indebidamente parte de la remuneración de un trabajador sin enterarla en los organismos previsionales, de tal manera, que no resulta ser aplicable en el presente caso la sanción de considerar que el término del contrato no produce efectos hasta que se pague el total de las



cotizaciones previsionales adeudadas, por lo que no cabe sino rechazar la demanda en lo que dice relación con la nulidad del despido.

Con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 162, 477, y 482 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que se **mantiene** –en la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada por Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, en la causa RIT O-6886-2019, caratulada “Maluenda con Corporación Nacional del Cobre de Chile” - las decisiones no afectadas con la invalidación, esto es, las signadas con los números romanos **I, II, III, IV, VI, VII y VIII**.

II.- Que se **rechaza** la demanda en cuanto al pago de remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen desde el despido ocurrido el 25 de julio de 2019 y hasta la fecha que se acredite el pago de las cotizaciones adeudadas.

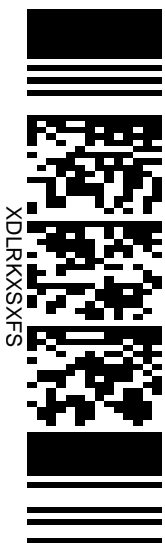
Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra interina Pamela Quiroga.

Laboral-Cobranza N°2394-2020.-

Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y la Ministra (I) señora Pamela Quiroga Lorca. No firman las Ministra (S) sra Poza y sra Quiroga, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber expirado su suplencia e interinato respectivamente.

En Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



TOMAS GUILLERMO GRAY
GARIAZZO
MINISTRO
Fecha: 26/07/2021 11:57:01



Proveído por el Señor Presidente de la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>